



JULIAN DUARTE <julianduarteb@gmail.com>

CONFIERO PODER

Notificaciones Judiciales <notificaciones@santander.gov.co>
Para: "julianduarteb@gmail.com" <julianduarteb@gmail.com>

11 de diciembre de 2025 a las 22:40

Cordial saludo,

Dr(a). **JULIAN FERNANDO DUARTE BALLESTROS**, mediante el presente escrito, CONFIERO PODER para que actúe en el proceso adelantado ante el **JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA**, bajo el radicado **68001-3333-004-2025-00154-00**, para que represente los intereses del Departamento de Santander.

Sin otro particular,

JHAN MARCO CASTILLO
Jefe Oficina Jurídica



PODER JENNIFER TATIANA SANCHEZ BUENO - RAD 68001-3333-004-2025-00154-00.pdf
244K

Señor Juez
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA
E. S. D.

Referencia:	Poder
EXPEDIENTE:	68001333300420250015400
MEDIO DE CONTROL/ACCIÓN O DEMANDA:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
DEMANDANTE:	JENNIFER TATIANA SANCHEZ BUENO
DEMANDADOS:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER NACION- MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG

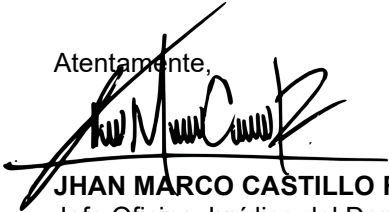
JHAN MARCO CASTILLO REYES, mayor de edad, en Bucaramanga, Santander, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.765.255 expedida en Bucaramanga, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica, nombrado mediante Decreto No. 701 del 29 de noviembre de 2025 y posesionado por el Gobernador del Departamento de Santander mediante Acta No. del 274 del 1 de diciembre de 2025, y en concordancia con el Decreto No. 0002 del 4 de enero de 2016, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente al abogado **JULIAN FERNANDO DUARTE BALLESTROS**, mayor de edad, identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 91.160.272 de Floridablanca, portador de la Tarjeta Profesional No. 265293 del C. S. de la J., correo electrónico registrado en SIRNA julianduarte@gmail.com, a fin de que adelante la representación y defensa judicial del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, Entidad Estatal con NIT. 890201235-6, dentro del asunto de la referencia.

El apoderado queda facultado para contestar la demanda, proponer excepciones previas y de mérito, interponer recursos, intervenir en audiencias, solicitar y controvertir pruebas, presentar incidentes, promover las actuaciones de impulso procesal, comunicar las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación en el marco de la conciliación judicial y, en general, realizar las gestiones necesarias para la adecuada representación judicial del Departamento, conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley 1564 de 2012 y en el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022

Se excluyen expresamente las facultades de conciliar, transigir, desistir, recibir, sustituir y reasumir, las cuales solo podrán ser ejercidas previa autorización formal del Comité de Conciliación y/o del Jefe de la Oficina Jurídica, de conformidad con la normativa institucional aplicable y los actos de delegación vigentes.

Sírvase reconocer personería al apoderado **JULIAN FERNANDO DUARTE BALLESTEROS**, mayor de edad, identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 91.160.272 de Floridablanca.

Atentamente,


JHAN MARCO CASTILLO REYES
Jefe Oficina Jurídica del Departamento de Santander
C.C. No. 1.098.765.255 de Bucaramanga
T.P No. 319906 del C. S. de la J.

Acepto,


JULIAN FERNANDO DUARTE BALLESTEROS
C. C. No. 91.160.272 de Floridablanca
T.P. No. 265293 del C. S. de la J.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.765.255**


CASTILLO REYES

APELLIDOS

JHAN MARCO

NOMBRES

JHAN MARCO CASTILLO
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1995**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

13-FEB-2013 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2700100-00435267-M-1098765255-20130510 0032991516A 1 39295150


Consejo Superior
de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:
JHAN MARCO

APELLIDOS:
CASTILLO REYES

**PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
EDGAR CARLOS SANABRIA MELO



UNIVERSIDAD:
SANTO TOMAS B/MANGA

FECHA DE GRADO:
07/12/2018

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTA


CEDULA:
1098765255

FECHA DE EXPEDICION:
16/01/2019

TARJETA N°
319906

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	DECRETO	CÓDIGO	AP-GJ-RG-38
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	27/06/2024
		PÁGINA	1 de 2

DECRETO No. --701

Por la cual se efectúa un nombramiento Ordinario

EL GOBERNADOR DE SANTANDER
En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO QUE:

El Doctor Alexander Robledo Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.723.647, quien se desempeñaba desde el 1° de octubre de 2024 como Jefe de la Oficina Jurídica, Nivel Directivo, Código 006, Grado 02, presentó renuncia el 10 de noviembre de 2025, la cual fue aceptada por el señor Gobernador en esa misma fecha mediante el Decreto 662 de 2025. En consecuencia, a partir del 11 de noviembre de 2025 la vacancia debió ser provista mediante encargo, por razones de necesidad del servicio, designándose para tal efecto al Doctor Jhan Marco Castillo Reyes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.765.255, servidor público que se desempeñaba en el empleo denominado Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 4.

Si bien las restricciones previstas en la Ley 996 de 2005 relativas a la vinculación de personal y a la modificación de la nómina estatal en el nivel territorial comienzan a regir cuatro (4) meses antes de las elecciones al Congreso de la República, lo cual implica que los gobernadores, alcaldes y los representantes legales de las entidades descentralizadas municipales, departamentales y distritales tienen prohibido vincular o desvincular personal o alterar la planta de personal desde dicha fecha; es preciso señalar que dicha limitación no es absoluta.

En efecto, conforme a la excepción contemplada en la Ley de Garantías Electorales, **resulta jurídicamente viable efectuar nombramientos cuando se trate de vacantes generadas por renuncia, licencia, fallecimiento o expiración del período fijo, siempre que dichos empleos sean indispensables para el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública.** Esta excepción opera aun cuando la vacancia se produzca antes o después del inicio del periodo de restricciones, en tanto el nominador acredite que la provisión es necesaria para evitar la afectación del servicio público.

La provisión de la vacante del Jefe de la Oficina Jurídica reviste especial importancia por cuanto dicho cargo garantiza la seguridad jurídica institucional, la defensa judicial del Departamento y la legalidad de los actos administrativos que se emiten. Esta jefatura es responsable de fijar los lineamientos jurídicos en materia contractual, dirigir la representación judicial, formular políticas de conciliación, asesorar al Gobernador y demás dependencias y adelantar trámites especializados tales como personerías jurídicas, inspección, vigilancia, control y procedimientos de nacionalidad.

De igual forma, ejerce competencias en materia disciplinaria, al liderar la etapa de juzgamiento, resolver recursos, custodiar archivos y emitir los conceptos jurídicos necesarios para la correcta toma de decisiones públicas.

La ausencia prolongada de este titular genera riesgos legales, disciplinarios, contractuales y fiscales, compromete la continuidad administrativa y afecta la defensa del patrimonio público. Por ello, su provisión resulta no solo precedente, sino indispensable para asegurar el adecuado funcionamiento de la entidad.

El artículo 23° inciso 2° de la ley 909 de 2004 establece: "Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley."

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	DECRETO -- 701	CÓDIGO	AP-GJ-RG-38
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	27/06/2024
		PÁGINA	2 de 2

En mérito de lo anterior, se

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Nombrar carácter ordinario a partir del 01 de diciembre de 2025 al Doctor JHAN MARCO CASTILLO REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.765.255 expedida en Bucaramanga (Sder.), en el empleo denominado JEFE DE OFICINA, NIVEL DIRECTIVO, CÓDIGO 006, GRADO 02, de la Planta de Empleos del Despacho del Gobernador - Empleo de Libre Nombramiento y Remoción.

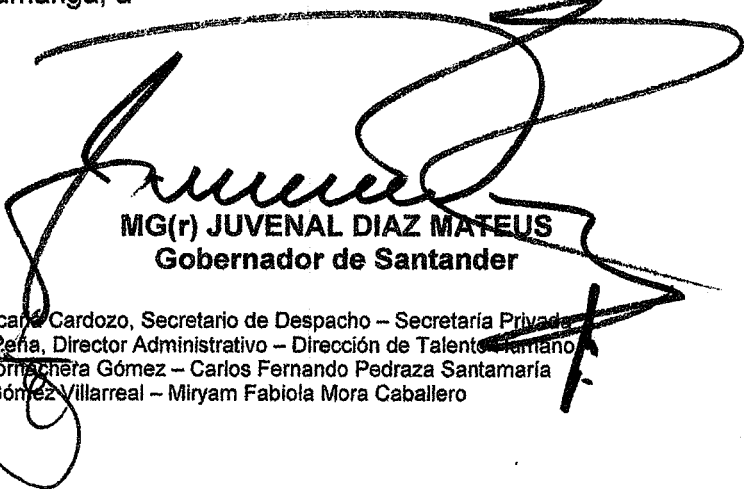
PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 1083 de 2015, JHAN MARCO CASTILLO REYES, tendrá diez (10) días a partir de la comunicación del presente Decreto para manifestar si acepta o rechaza el nombramiento.

ARTÍCULO 2º: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a JHAN MARCO CASTILLO REYES.


ARTÍCULO 3º: El presente Decreto rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,
Expedida en Bucaramanga, a

29 NOV 2025


MG(r) JUVENAL DIAZ MATEUS
Gobernador de Santander

Vo.Bo.: Magda Milena Ocampo Cardozo, Secretario de Despacho – Secretaría Privada
Proyectó: Silvestre Olaya Peña, Director Administrativo – Dirección de Talento Humano
Elaboró: Carlos Andrés Bernal Cárdenas – Carlos Fernando Pedraza Santamaría
Edwing Eliecer Gómez Villarreal – Miryam Fabiola Mora Caballero

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	ACTA DE POSESIÓN	CÓDIGO	ES-GETH-RG-45
		VERSIÓN	0
		FECHA APROBACIÓN	18/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA DE POSESION No. 274

DD / MM / AAAA

Fecha : 01 12 2025

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, se presentó en el Despacho del Señor

Gobernador, el(la) señor(a) JHAN MARCO CASTILLO REYES

Identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098765255

Expedida en Bucaramanga

Con el fin de tomar posesión del:

CARGO: JEFE DE OFICINA - OFICINA JURÍDICA

CÓDIGO: 006

GRADO: 02

NIVEL: DIRECTIVO

ASIGNACIÓN MENSUAL : \$21610381

PLANTA: Planta de Empleos del Despacho del Gobernador (Empleos de Libre Nomenclatura y Remoción)

CARÁCTER NOMBAMIENTO: Ordinario

Acto Administrativo: Decreto No. 701

FECHA: DD / MM / AAAA 29 11 2025

Emanado: Despacho del Gobernador

Documentos Verificados :

	SI	NO		SI	NO
Requisitos del cargo según formato de verificación de competencia	x		Afiliación a la EPS		
Antecedentes Judiciales	x		Afiliación Fondo de Pensiones		
Antecedentes Disciplinarios	x		Afiliación Fondo de Cesantías		
Antecedentes Fiscales – Contraloría	x		Formato Único Hoja de Vida	x	
Declaración de Bienes y Rentas	x		Libreta Militar		

OBSERVACION: Los demás documentos, se encuentran en la historia laboral del funcionario.

Verificado el cumplimiento de requisitos, el posesionado prestó el juramento ordenado por el Artículo 122 de la Constitución Nacional y manifestó bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional y demás normas legales vigentes.

La presente posesión tiene efectos fiscales y legales a partir de: DD / MM / AAAA 01 12 2025

En consecuencia, se firma como aparece:

JUVENAL DIAZ MATEUS
Gobernador

JHAN MARCO CASTILLO REYES
Posesionado

SILVESTRE OLAYA PEÑA
Director Administrativo de Talento Humano

Revisó: Sandra Patricia Quiros Marin – Secretaria Administrativa

Elaboró: Yolmary Jaimes Ardila



DECRETO	CÓDIGO: AP-JC-RG-70	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 2	PÁG. 1 DE 1
---------	---------------------	-----------------	------------	-------------

DECRETO No. 0002
"Por el cual se efectúa una delegación"

EL GOBERNADOR DE SANTANDER

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contempladas en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 23 de la Ley 446 de 1998, artículos 9.10.11 y 12 de la Ley 489 de 1998, artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, C.G.P.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política estipula "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado..."

Que el artículo 23 de la Ley 446 de 1998, dispone que las modificaciones del auto admisorio de las demandas a las entidades públicas, deben hacerse personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que: "... los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley".

Que para garantizar un trámite oportuno, completo y eficiente a las acciones judiciales promovidas por y en contra el Departamento de Santander, se hace necesario implementar el trámite interno correspondiente.

Que se hace necesario dar aplicación al artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 C.P.G.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

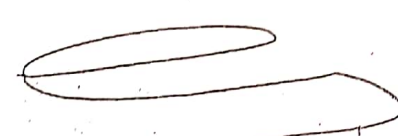
ARTICULO PRIMERO: Delegar en el JEFE DE LA OFICINA JURIDICA el ejercicio de la representación judicial del Departamento de Santander, en virtud de la cual podrá representar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER directamente, otorgar poder a cualquier abogado del ente territorial o, si es del caso, a un abogado externo.

ARTICULO SEGUNDO: Delegar en el JEFE DE LA OFICINA JURIDICA la notificación de los actos administrativos de las demandas que se profieran dentro de los procesos adelantados en cualquier jurisdicción en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Así mismo, el Jefe de la Oficina Jurídica podrá otorgar poder a quienes representarán judicial y extrajudicialmente al Departamento de Santander en defensa de sus intereses.

ARTICULO TERCERO: El presente decreto, rige a partir de su expedición, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Expedido en Bucaramanga a los, 04 ENE 2016


DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

Honorable
JUZGADO 04 ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA
E. S. D.

Referencia:	Contestación demanda
EXPEDIENTE:	68001333300420250015400
MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE:	JENNIFER TATIANA SANCHEZ BUENO
DEMANDADO:	Departamento de Santander, NACION-MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG

JULIAN FERNANDO DUARTE BALLESTROS, mayor de edad, identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 91.160.272 de Floridablanca, portador de la Tarjeta Profesional No. 265293 del C. S. de la J, domiciliado en Bucaramanga (Santander), en calidad de apoderado de la parte demandada, **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, según poder adjunto, conferido por la Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Santander, por medio del presente escrito me permito contestar la demanda de la referencia en los siguientes términos:

I. A LAS PETICIONES

El Departamento de Santander **SE OPONE** a las solicitudes y pretensiones contenidas en el libelo de demanda, puesto que carecen de vocación de prosperidad, tal y como se expondrá oportunamente en el acápite de razones de la defensa de la presente contestación. Sin embargo, a efectos de conservar el orden de relación del respectivo acápite, procedo a individualizarlas de la siguiente forma:

- A LA PARTE DECLARATIVA

A LA PRIMERA: Me opongo, a la inaplicación por ilegalidad (de acuerdo con el demandante) del Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto Nacional 887 del 2 de junio de 2023.

El Decreto 284 de 2024, Por medio del cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, fue expedido por el Presidente de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación, y el Departamento Administrativo de la Función Pública; la entidad que represento, Departamento de Santander, no tiene ninguna competencia, ni participación en la fijación de derechos salariales de los docentes.

De otra parte, existe una indebida formulación de la pretensión, observe señor Juez que el actor no formula ningún cargo de nulidad frente al **Decreto 284 de 2024**, sino sobre los actos administrativos expedidos en los **años 2008 y 2009**, a través de los cuales se estableció la escala salarial de los docentes con una serie de incrementos salariales diferenciados según la ubicación en el escalafón, aspecto este que es el punto clave del reclamo del demandante.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	3 de 19

caso la ley se mantiene en el mundo jurídico, solo que no se aplica al caso concreto del ciudadano que solicita se le exceptúe.

Ahora bien, con relación a **los actos administrativos**, existen dos figuras:

- **Acción de nulidad por inconstitucionalidad:** Acción pública con que cuentan los ciudadanos, de demandar los actos administrativos cuando estiman que violan la ley o la Constitución. En estos Casos resuelve la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, regulada en el artículo 135 del CPACA.
- **Excepción de ilegalidad:** Posibilidad que tiene un ciudadano de solicitar que respecto de su caso concreto no se aplique determinado acto administrativo porque va en contra de la ley y la Constitución. El acto administrativo no sale del mundo jurídico, sino que se deja de aplicar para el caso particular

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el demandante alega que los decretos de incremento salarial expedidos en **años 2008 y 2009** eran violatorios de la Constitución Nacional, debió formular **la acción de nulidad por inconstitucionalidad**¹, y no pretender que se inaplique el Decreto 284 de 2024, que no es el acto administrativo que generó la presunta violación del derecho, que además tampoco sustento, pues se limitó a mencionar las diferencias que refleja el decreto, originadas desde la expedición de los decretos salariales de los años 2008 y 2009.

A LA SEGUNDA: No me pronuncio respecto a esta pretensión ya que acto administrativo no lo expidió la entidad que represento Departamento de Santander, sino por el contrario la también demandada **LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG**, a quien le corresponde emitir un juicio al respecto.

A LA TERCERA: Me opongo, el acto administrativo identificado con el radicado **No. 20240039922, de fecha 20/03/2024**, proferido por la Secretaria de Educación Departamental de Santander, frente a la reclamación administrativa presentada por el demandante, se ajusta al régimen legal vigente. Los decretos de incrementos salariales de los docentes y directivos docentes son de orden nacional y son expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales son firmados por el Presidente de la Republica, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, la Ministra de Educación Nacional, y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las Secretarías de Educación que se encuentran certificadas a nivel nacional se rigen y es de obligatorio cumplimiento aplicar los porcentajes aprobados en los decretos de incrementos salariales de los

¹ **ARTÍCULO 135. Nulidad por inconstitucionalidad.** Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.

También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	4 de 19

docentes y directivos docentes expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Además de acuerdo con la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002, el competente para fijar la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes es el Departamento Administrativo de la Función Pública.

A LA CUARTA: Me opongo, el demandante no ostenta el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la petición realizada, como reclama, pues su grado en el escalafón (2B) es diferente a la posición con respecto a la cual equivocadamente se equipará (2A).

Al respecto es importante precisar el objeto del Decreto 1278 de 2002 es establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes.

Concomitante con lo anterior los **decretos 1407 de 2008 y 1238 de 2009**, a través de los cuales se estableció la escala salarial para esos años, tenían como finalidad remunerar la labor docente de acuerdo con el desempeño, méritos y experiencia.

- A LA PARTE CONDENATORIA

DE LA PRIMERA A LA TERCERA: Me opongo, a que se condene al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, al reconocimiento y pago al docente, de los dineros, perteneciente a la categoría 2B, de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada e ilegal (según el demandante) en el año 2008 y 2009, en relación con el grado de escalafón 2A, por cuanto en lo que respecta al **departamento de Santander, NO es competente para definir directamente los salarios y prestaciones sociales de los docentes y debe ceñirse a los criterios que para el efecto fije el Gobierno Nacional.**

A LA CUARTA: Me opongo a que se condene al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** al reconocimiento y pago al docente de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo; por cuanto como ya se dijo, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, NO es competente para definir directamente los salarios y prestaciones sociales de los docentes y debe ceñirse a los criterios que para el efecto fije el Gobierno Nacional

A LA QUINTA: Me opongo a que se condene al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** al reconocimiento y pago de intereses moratorios, por

 República de Colombia Gobernación de Santander	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	5 de 19

cuanto el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, NO es competente para definir directamente los salarios y prestaciones sociales de los docentes y debe ceñirse a los criterios que para el efecto fije el Gobierno Nacional; por lo tanto, no existen razones de hecho ni de derecho para ser condenado.

A LA SEXTA: Me opongo a que se condene al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** a dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso, por cuanto como ya se explicara en las razones de defensa y con las excepciones propuestas, el Departamento de Santander, NO es competente para definir directamente los salarios y prestaciones sociales de los docentes y debe ceñirse a los criterios que para el efecto fije el Gobierno Nacional.

A LA SEPTIMA: Me opongo a que se condene en costas al Departamento de Santander, porque no existen razones de hecho ni de derecho para haber iniciado el presente proceso en contra de esta entidad, y por ende no puede haber una condena en costas en su contra.

II. A LOS HECHOS

AL PRIMERO: Es parcialmente cierto. Es cierto que mediante los Decretos Nacionales 1313 de 2005, Decreto Nacional 596 de 2006 y Decreto Nacional 634 de 2007, el Gobierno Nacional determinó la asignación básica mensual para los docentes de los distintos grados del Escalafón Nacional Docente de que trata el Decreto 1278 de 2002, para los años 2005, 2006 y 2007, el reajuste salarial fue el mismo porcentaje de aumento para todos los docentes del escalafón.

Ahora bien, respecto a la afirmación del demandante de que los docentes se encuentran en igualdad de condiciones, esta no es cierta en lo que respecta al tema salarial, pues precisamente el objeto del **Decreto 1278 de 2002**, es: *Artículo 1: "establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes".*

Y el "Artículo 19. Escalafón Docente. Se entiende por Escalafón Docente el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional.

 República de Colombia Gobernación de Santander	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	6 de 19

La idoneidad encierra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se consideran imprescindibles para el desempeño de la función docente.

Lo que permite concluir que existen determinadas condiciones, o exigencias establecidas por la ley que admiten una diferenciación entre el personal docente, sin que sea discriminatoria, pues lo que busca hacer reconocimiento a la formación, experiencia y desempeño del docente.

AL SEGUNDO: No es cierto, que para los años 2008 y 2009, se determinaron incrementos salariales de manera indiscriminada, en contravía de la constitución y la ley, para el docente oficial perteneciente a la categoría 2B, en relación con la categoría 2A.

Es importante insistir en que tanto los **Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008; y los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009**, que determinaron los incrementos salariales para los años 2008 y 2009, fueron expedidos por el Gobierno Nacional; **El Departamento de Santander no intervino en la expedición de los mismos**, porque carece de competencia para regular el incremento salarial del personal docente.

Así lo establece la ley 1278 de 2002 en el Artículo 46 *"Salarios y prestaciones. **El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados**, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan".* Negrilla y resaltado fuera del texto.

Por otra parte, con el nuevo régimen docente el procedimiento para ascender pasó de 14 escalas que traía el Decreto 2277 de 1.979), a un sistema con números y letras. La ley 1278 de 2002 en su artículo 20, dispone. *"Estructura del Escalafón Docente. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3) grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D)".*

La norma establece diferencias entre los grados:

- **Grado 1:** Normalista superior o tecnólogo en Educación.
- **Grado 2:** Licenciados en Educación o profesionales con títulos diferentes que tenga postgrado en Educación o un programa de Pedagogía.
- **Grado 3:** Licenciados en Educación o profesionales con títulos de maestría o doctorado en un área afín a la que van a desempeñar.

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	7 de 19

En consecuencia, no puede el demandante comparar como iguales los grados 2A y 2B, pues sus condiciones de formación y experiencia son distintas, de modo que, no existe una vulneración al artículo 13 y 53 de la Constitución Política.

AL TERCERO: No me pronuncio sobre este hecho, porque como se explicará en las excepciones que se proponen con esta contestación, el **Departamento de Santander** no tiene competencia para realizar incrementos salariales a los docentes, por lo tanto, no intervino en ninguno de los decretos que del año **2010 al 2023** se expidieron para tal efecto.

AL CUARTO: Es parcialmente cierto. Es cierto que fue la Nación - Ministerio de Educación Nacional, quien expidió los Decretos Nacionales que fijaron los salarios de los docentes, en las anualidades 2008 y 2009, como se ha insistido en esta contestación y como lo admite el demandante, es quien tiene la competencia para hacerlo. El Departamento de Santander no intervino en estas disposiciones.

No me pronuncio respecto a la afirmación del demandante “*aplicando de manera **injustificada e ilegal** diferentes porcentajes en los incrementos de los escalafones para las categorías 2A y 2B, vulneró de manera directa los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y los artículos 46 y 49 del Decreto - Ley 1278 de 2002,* pues es evidente que el hecho se refiere a la entidad que expidió los Decretos, que para el caso fue la Nación Ministerio de Educación nacional, quien también esta demandada en este proceso y a quien le corresponde emitir un juicio al respecto.

AL QUINTO: Es cierto, en lo que respecta al **Departamento de Santander**, dio respuesta de manera oportuna, a la reclamación administrativa realizada por el demandante.

RAZONES DE LA DEFENSA

La parte actora, pretende que la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales a la docente **YASMIN CUEVAS PINZON**, perteneciente a la categoría **2B**, por ello solicita inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, por considerar que es contrario a la Constitución y a la ley, por cuanto en los años 2008 y 2009 los incrementos salariales que realizo el Gobierno nacional se hizo en forma indiscriminada y desigual, además de lo anterior solicita se declaren nulos los actos administrativos de la Nación Ministerio de Educación Nacional y del Departamento de Santander, mediante los cuales negó la reclamación administrativa.

El artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución, estableció como atribución del Congreso de la República la siguiente:

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	8 de 19

«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: e) **Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos**, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;» (Subrayas fuera del texto)

Por su parte, el artículo 189 numeral 14 de la Constitución prevé que:

«Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, **señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos**. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales».

La **ley 4 de 1992**, Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Artículo 1 "El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional."

Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional, **dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente** a los empleados enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.

El artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a los que debe someterse el gobierno nacional para ejercer la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyó en esta clasificación no solo a los servidores del orden nacional, sino también a los territoriales:

"El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

Posteriormente el presidente de la Republica expidió el Estatuto de Profesionalización Docente **Decreto 1278 de junio 19 de 2002**, que tenía por objeto:

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	9 de 19

ARTÍCULO 1. Objeto. *El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes.*

Estatuto que establece: **Artículo 46. Salarios y prestaciones.** *El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan.*

En cumplimiento de lo anterior año a año, el Presidente de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, han expedido los Decretos Nacionales 1313 de 2005, 596 de 2006, 634 de 2007, 624 de 2008, 714 de 2008, 1407 de 2008, 702 de 2009, 1328 de 2009, ...319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 887 de 2023, y el ultimo 284 de 2024, mediante los cuales se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.

Como se puede evidenciar el Departamento de Santander, no tiene competencia, por lo tanto, no interviene en la expedición de los decretos que fina el incremento salarial de los docentes, solo se limita a dar cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior hay una clara falta de legitimación por pasiva frente al Departamento de Santander, quien debe ser desvinculado del presente proceso.

EXCEPCIONES

El Departamento de Santander propone de conformidad con el artículo 175 del CPACA, las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES DE MERITO:

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La **LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA** tiene que ver con la relación jurídica sustancial objeto del proceso, de manera que es propia del debate procesal, como quiera que se relaciona con el derecho que se pretende, con la calidad de las personas que por activa o pasiva figuran como sujetos procesales, bien porque formulan las pretensiones (activa) o porque se oponen a ellas (pasiva).

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	10 de 19

El H. CONSEJO DE ESTADO, ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material, así:

"En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que, si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. La ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto procesal sino sustancial del litigio. De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados".²

Así las cosas, se advierte que la LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA atañe a dos aspectos, de una parte, con relación sustancial –legitimatío ad causam- referida a alguno de los extremos de la relación jurídica de la que surge la controversia, así como con los derechos y obligaciones que se pretenden o excepcionan según el caso; y de otra parte, con la legitimación procesal –legitimatío ad processum- o la aptitud legal de las partes para comparecer y actuar en el proceso. Es por ello que la legitimatío ad causam no es un presupuesto procesal, ya que es objeto de análisis en el fondo del asunto; mientras que la legitimatío ad processum “si constituye un presupuesto procesal y su falta configura un vicio de nulidad que compromete el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse.

El H. CONSEJO DE ESTADO, ha considerado que si bien la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada de manera de excepción pueda ser resuelta en esa oportunidad procesal, toda vez que, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 del C.P.A.C.A., en el curso de la audiencia inicial, el Juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva, las cuales se pueden declarar solo si se tiene certeza acerca de su configuración, pues de lo contrario, en aras de garantizar el derecho fundamental del ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el estudio de este presupuesto debe abordarse al momento de proferirse la respectiva sentencia.

En el presente asunto, conforme a las pretensiones de la demanda, se pretende que se inaplique por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, producto de lo anterior se declare la nulidad del acto administrativo expedidos por el Departamento de Santander que niegan la reclamación administrativa realizada por el demandante por cuanto los Decretos que

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. 1 Sentencia del 27 de marzo de 2014. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth. Radicación Número: 25000-23- 26-000-1999-00802-01 (28204)

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	11 de 19

fijaron los incrementos salariales de los docentes no fueron expedidos por el Departamento de Santander, porque no tiene competencia para ello, por tanto no existe legitimación para su reclamo a la entidad que represento.

El artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución, estableció como atribución del Congreso de la República la siguiente:

«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: e) **Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos**, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;» (Subrayas fuera del texto)

Por su parte, el artículo 189 numeral 14 de la Constitución prevé que:

«Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, **señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos**. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales».

La **ley 4 de 1992**, Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Artículo 1 "El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, **fijará el régimen salarial y prestacional de:**

b. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional."

Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional, **dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente** a los empleados enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.

El artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a los que debe someterse el gobierno nacional para ejercer la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyó en esta clasificación no solo a los servidores del orden nacional, sino también a los territoriales:

"El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	12 de 19

Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

El presidente de la Republica expidió el Estatuto de Profesionalización Docente **Decreto 1278 de junio 19 de 2002**, que tenía por objeto:

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes.

Estatuto que establece: **Artículo 46. Salarios y prestaciones. El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto;** y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan.

En cumplimiento de lo anterior año a año, el **Presidente de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación, y el Departamento Administrativo de la Función Pública**, han expedido los Decretos Nacionales 1313 de 2005, 596 de 2006, 634 de 2007, 624 de 2008, 714 de 2008, 1407 de 2008, 702 de 2009, 1328 de 2009,319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 887 de 2023, y el ultimo **284 de 2024**, mediante los cuales se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.

Como se puede evidenciar el **Departamento de Santander**, no es competente por lo tanto no interviene en la expedición de estos decretos, y solo se limita a dar cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, por lo tanto, **no está legitimad por pasiva para ser demandado en este proceso.**

La **ley 715 de 2001**, en su artículo 1 establece: *Naturaleza del Sistema General de Participaciones. "El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley".*

ARTÍCULO 3. Conformación del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones estará conformado así:

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denominará participación para educación.

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	13 de 19

(...)

ARTÍCULO 15. *Destinación. Los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes actividades:*

15.1. Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales.

Ahora bien, respecto a la competencia de las entidades la ley 715 establece:

ARTÍCULO 5. *Competencias de la Nación en materia de educación.*

5.13. Distribuir los recursos para educación del Sistema General de Participaciones, conforme a los criterios establecidos en la presente ley.

5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como de calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y la disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones.

ARTÍCULO 6. Competencias de los departamentos. *Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:*

6.1. Competencias Generales.

6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar.

6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información educativa departamental y suministrar la información a la Nación en las condiciones que se requiera.

6.1.3. Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen en los términos previstos en la presente ley.

6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos del Sistema General de Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el departamento no lo certifica, podrá solicitarla a la Nación.

6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.

6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley.

Como se puede observar la competencia del departamento es **administrar y distribuir** los recursos que **provienen** del Sistema General de Participaciones.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	14 de 19

En ese orden de ideas, el **Departamento de Santander**, no puede responder con sus recursos por una inesperada condena, por cuanto si bien es cierto en virtud de la misma Ley 715 de 2001, las entidades Territoriales son responsables de la administración, distribución los recursos del Sistema General de Participaciones, también lo es que el Departamento de Santander acato y dio cumplimiento a los Decretos que se encontraban vigentes y que expidió Presidente de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y no podría responsabilizarse por el pago de unos incrementos salariales que nunca estuvieron previsto en los Decretos, por lo tanto nunca recibió estos recursos del Sistema General de Participaciones con destinación específica para la educación.

Por lo tanto es la **Nación-Ministerio de Educación**, quien en caso de un eventual fallo en contra al prosperar las pretensiones de la demanda debe responde, en principio porque intervino en la expedición de los Decretos de incrementos salariales, además porque es la competente para administrar y regular el Sistema General de Participaciones, que corresponde a los recursos que la Nación debe transferir a las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, para la financiación de los servicios a su cargo en educación, y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

Así las cosas, es claro que, de acuerdo con **los artículos 150, numeral 19, literal e), 189 numeral 14 de la Constitución política, ley 4 de 1992, y el Decreto 1278 de junio 19 de 2002**, las fijación del salario e incrementos salariales de los docentes, se encuentran a cargo El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación, y el Departamento Administrativo de la Función Pública; por lo que no es viable endilgársele obligación alguna al **Departamento de Santander**, frente al reconocimiento y pago de incrementos salariales del personal docente de las entidades territoriales nominadoras que cumplieron en su momento con lo que establecieron los decretos que expido el gobierno nacional.

2. INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO A DEMANDAR.

De estudio de las pretensiones y hechos de la demanda se logra evidenciar que los actos administrativos radicado 2024-EE-082780 proferido por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, y el acto administrativo identificado con el radicado No. 20240039922, notificado el día 20/03/2024 y proferido por el SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, no fueron los que causaron la lesión al demandante, pues ese menoscabo alegado fue producto del incremento salarial desigual de contenido en los **Decreto 624 del 2008, Decreto 714 del 2008, Decreto 1407 del 2008, Decreto 702 del 2009 y el Decreto 1238 de 2009.**

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	15 de 19

Pese a lo anterior el demandante formula cargos de nulidad en contra del **decreto 284 de 2024**, *“por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal”*.

Sin embargo, como ya se dijo, el concepto de violación que alega el demandante, lo realiza en contra de los **Decreto 624 del 2008, Decreto 714 del 2008, Decreto 1407 del 2008, Decreto 702 del 2009 y el Decreto 1238 de 2009**, mediante los cuales se estableció la escala salarial de los docentes durante los años 2008 y 2009 y se asignaron incrementos salariales diferenciados de acuerdo con el grado y la ubicación en el escalafón del docente, siendo este último punto el reproche principal formulado por demandante.

De acuerdo con lo anterior es indudable que los actos administrativo objeto de nulidad debieron ser los **Decretos 624 del 2008, 714 del 2008, 1407 del 2008, 702 del 2009, y 1238 de 2009**, que fueron los que establecieron la diferencia en el incremento salarial que alega el demandante, y no el **Decreto 284 de 2024**, como de manera errada lo hizo el demandante, ya que contra este último no existe ningún reproche pues solo modifica la remuneración del año 2024 como lo exige la norma.

El demandante ataca el Decreto **284 de 2024**, por que los decretos de los años 2008 y 2009 que establecieron la diferencia en el incremento salarial se encuentran derogados, al respecto es importante precisar, que contrario a los argumentos del demandante contra los actos administrativos derogados si se puede ejercer el control de legalidad, así lo ha establecido el Concejo de Estado³ *"ACTO GENERAL DEROGADO - Procedencia de control de legalidad / ACCION DE NULIDAD - Procede contra acto general derogado / DEROGATORIA DE ACTO GENERAL - No recobra el imperio del orden jurídico / ACCION DE NULIDAD - Finalidad Según se ha informado, esa resolución fue derogada en su integridad por el artículo 30 de la resolución 3099 de 2008. Por consiguiente, las disposiciones acusadas desaparecieron del mundo jurídico. No obstante, por tratarse de disposiciones administrativas generales son susceptibles de la acción ahora incoada, toda vez que la derogación tiene efectos ex – nunc, lo cual implica que el acto derogado mantiene su presunción de legalidad por todo el tiempo que estuvo vigente; presunción que es iuris tan tum o mientras no se declare lo contrario, lo que está reservado a esta jurisdicción a instancia de parte que alegue y demuestre la ilegalidad del acto administrativo general derogado, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la sentencia S-157 de 14 de enero de 1991, con ponencia del consejero doctor Carlos Gustavo Arrieta, consignados en el siguiente aparte: "...la Sala opina que, aún a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario que esta Corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de contenido*

³ Concejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C siete (7) de octubre del dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00368-00

 República de Colombia Gobernación de Santander	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	16 de 19

general que se impugnen en ejercicio de la acción de nulidad, pues solamente así se logra el propósito último del otrora llamado contencioso popular de anulación, cual es el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por la norma acusada, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca, tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia”.

De acuerdo a lo anterior, si se puede realizar un juicio de legalidad frente a un acto administrativo de carácter general, como son los decretos que establecieron los incrementos salariales en los años 2008, y 2009, sin importar que estos ya hubiesen sido derogados, y No es congruente que el demandante solicite el pago de las diferencias salariales originadas en los incrementos desiguales según su criterio, sin demandar la nulidad de los mismos, pues aunque estos actos administrativos fueron derogados, sus efectos jurídicos seguirán reproduciéndose, además de conservar intacta su presunción de legalidad, por lo cual no es posible acceder a las pretensiones del actor sin previamente declarar la nulidad de los actos administrativos referidos.

3. INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL.

Teniendo claro que los actos administrativos que se debían demandar fueron los **Decretos 624 del 2008, 714 del 2008, 1407 del 2008, 702 del 2009, y 1238 de 2009**, por que el demandante cuestiona su legalidad y constitucionalidad, se hace pertinente precisar que el medio de control indicado es el de Nulidad Simple del artículo 137 del CPACA o la Nulidad por inconstitucionalidad del artículo 135 de la misma disposición, sin que fuera pertinente el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por el que opto el demandante.

4. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

El demandante pretende la nulidad del **decreto 284 de 2024** y así mismo el pago de *“las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a esta petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro”* Es decir, las diferencias salariales correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y de enero a mayo del 2024. No obstante, prescindiendo de la discusión sobre la indebida escogencia del acto administrativo objeto de nulidad, se debe indicar que la escala salarial docente vigente durante los años 2021, 2022 y 2023 fue establecida mediante los decretos 965 de 2021, 449 de 2022 y 887 del 2 de junio de 2023, actos administrativos que no pueden ser objeto del medio de control nulidad y restablecimiento toda vez que ha fenecido el término de cuatro (4) meses para presentar la respectiva demanda en contra de los mismos, por lo tanto, tampoco puede solicitar el pago de las diferencias salariales aparentemente

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	17 de 19

causadas en esos años (2021, 2022 y 2023), como erróneamente se pretende.

La ley 1437 de 2011 artículo 138 reza:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Iguualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

La misma ley en el artículo 164 literal d, numeral 2 establece:

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

De lo cual se concluye que, el termino para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento, cuando se presentó la demanda ya había caducado.

5. EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACTUÓ AMPARADO EN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

*"Uno de los elementos definitorios del Estado moderno es la sujeción de sus autoridades al principio de legalidad. La idea de que el ejercicio del poder no puede corresponder a la voluntad particular de una persona, sino que debe obedecer al cumplimiento de normas previamente dictadas por los órganos de representación popular, es un componente axiológico de la Constitución Política de 1991, en la cual se define expresamente a Colombia como un Estado social de derecho (artículo 1) basado en el respeto de las libertades públicas y la defensa del interés general (artículo 2). Esta declaración de principios a favor del respeto por la legalidad se refleja directamente en varias otras disposiciones constitucionales según las cuales (i) **los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación de funciones** (artículo 6); (ii) **ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la***

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	18 de 19

Constitución y la ley (artículo 121); y (iii) no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento. (...) De este modo, **el principio constitucional de legalidad exige que la actuación de las diferentes autoridades tenga una cobertura normativa suficiente o, lo que es lo mismo, esté basada en una norma habilitante de competencia**, que confiera el poder suficiente para adoptar una determinada decisión. Como señala García de Enterría, en virtud del principio de legalidad el ordenamiento jurídico "otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites", de modo que "habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos". (...) Precisamente, al no ser la competencia un elemento accidental o superfluo de los actos administrativos, su inobservancia afecta la validez de la decisión y en ese sentido constituye causal de nulidad de los actos administrativos (artículo 137 CPACA). Por tanto, para resolver el asunto consultado será necesario tener en cuenta que la competencia administrativa debe ser expresa y suficiente en sus diferentes componentes -funcional, territorial y temporal-, que las autoridades no pueden auto-atribuirla y que tampoco les será lícito asumir aquella que corresponda a otra entidad. Como se ha visto, una decisión adoptada sin competencia atenta directamente contra el principio constitucional de legalidad y permite activar los mecanismos existentes para su expulsión del ordenamiento jurídico"⁴

Por lo anterior, el acto administrativo **radicado No. 20240039922**, proferida por la Secretaria de Educación del Departamento de Santander, demandado en este proceso, a través del cual con total validez legal se niegan las pretensiones del peticionario, pues como ya se ha indicado el Departamento de Santander no es la autoridad competente para fijar el salario ni el incremento salarial de los docentes, esta competencia por disposición constitucional y legal esta en cabeza de Gobierno nacional específicamente en el Presidente de la Republica, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, la Ministra de Educación Nacional, y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien expido los **Decretos 624 del 2008, 714 del 2008, 1407 del 2008, 702 del 2009, y 1238 de 2009, que según el demandante causaron la desigualdad en el incremento salarial de los docentes. El Departamento de Santander amparado en el principio de legalidad solo acato las disposiciones de las autoridades competentes.**

6. GENERICA

En virtud del principio de búsqueda de la verdad real sobre la verdad formal en materia de excepciones, la jurisprudencia reiteradamente ha establecido que lo importante no es el nombre que se le dé a la excepción de fondo, sino la relación de los hechos en que se apoya. En este sentido, frente a los poderes oficiosos del Juez es necesario afirmar que lo fundamental no es la delación de los hechos que configuran una determinada excepción, sino la prueba de estos, por ende, si el Juez

⁴ Sentencia 00128 de 2016 Consejo de Estado.

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	MEMORIALES GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	AP-GJ-RG-56
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	17/07/2024
		PÁGINA	19 de 19

encuentra probados los hechos que la constituyen deberá reconocerla oficiosamente.

PETICIÓN

Respetuosamente solicito al señor Juez, se tengan por probadas las excepciones propuestas.

PRUEBAS

Documentales:

Solicito respetuosamente se tengan como pruebas documentales las siguientes:

- 1. Copia del expediente administrativo de la petición de reconocimiento y pago de incrementos salariales presentada por la demandante, que contiene:
 - a. Petición del demandante.
 - b. Radicación de la petición.
 - c. Respuesta del Departamento de Santander.
- 2. Certificación de tiempos de servicios, donde además se evidencia el escalafón docente.

ANEXOS

- Poder para actuar, con sus respectivos anexos.

NOTIFICACIONES

El Departamento de Santander las recibirá en la Oficina Jurídica del Departamento, ubicada en la Calle 37 No. 10 – 330 Gobernación de Santander, al correo electrónico notificaciones@santander.gov.co y al correo del apoderado julianduarte@gmail.com

Atentamente,



JULIAN FERNANDO DUARTE BALLESTEROS
C.C. No. 91.160.272 de Floridablanca
I.P. No. 265293 del C. S. de la J